

Editorial

EL PODER PERVERSO

La publicación en las revistas "Cambio" y "Semana" de las declaraciones de Pablo Enrique García, ex director de informática del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), donde sindicó a Jorge Noguera ex director del mismo organismo, de haber puesto esta entidad al servicio del narcotráfico y del paramilitarismo, ha provocado la ira presidencial.

Álvaro Uribe niega que en el DAS pase algo, yéndose lanza en ristre contra todos aquellos que exigen el cese de la impunidad estatal. Como si esto fuera poco, el denunciante ha entregado detalles al por mayor sobre cómo la inteligencia colombiana, a través de este organismo de seguridad, conspiraba contra el gobierno bolivariano de Venezuela. Denuncias, que por supuesto, el gobierno de Uribe en su momento negó.

Es repugnante el espectáculo ofrecido por el alto gobierno, involucrado hasta la médula en el binomio Estado – paramilitarismo, cuyo denominador común lo integran la corrupción, la compra de votos, el abuso de poder, el enriquecimiento por narcotráfico y la degradación moral en todos los frentes, actuando con absoluta impunidad y descarado acento intimidatorio.

Emparentado como está el presidente Uribe con el paramilitarismo, no puede pasar de agache con las denuncias en contra de Jorge Noguera, ni tampoco tratar de engañar al país con sus frenéticos discursos contra la prensa y la oposición política.

Dados los hechos, se impone exigir una investigación independiente y veraz, sobre el contubernio Estado – paramilitarismo que se incubó desde el poder ejecutivo, como diversas entidades de derechos humanos, nacionales e internacionales y muchos otros venimos denunciando desde hace rato.

Es hora de reconocer que el narcotráfico y el paramilitarismo han aprovechado el gigantesco vacío del Estado, aupados desde la propia presidencia de la República con el consentimiento generalizado de todos los poderes públicos, de los partidos políticos tradicionales, de los gremios, de la iglesia, de las Fuerzas Armadas. En este sentido, el presidente Uribe es culpable por acción u omisión, ya que la jefatura del DAS (inteligencia estratégica del Estado) está bajo su responsabilidad directa y Jorge Noguera, el director de esa institución, con un amplio prontuario delincencial, cumplía órdenes directas de la presidencia.

Pretender engañar al país haciéndole creer que el jefe de inteligencia del Estado se reunía a escondidas con un matón como "Jorge 40", reconocido jefe

paramilitar de la Costa Atlántica, azote cruel de las comunidades indígenas, asesino de dirigentes sociales y de la izquierda, pandillero y narcotraficante de marca mayor, es en el mejor de los casos, una evidencia de que el presidente de la República es un buen cómplice y cabildero de los cobardes matones paramilitares.

Todo viene quedando al descubierto. Ante la gravedad de las denuncias y los peligros implícitos para los colombianos al saber que quienes dicen "cuidar sus bienes y seguridad" están emparentados con personajes de tan siniestra procedencia, como el ya señalado "Jorge 40", o los llamados Salvatore Mancuso, Vicente Castaño, Diego Murillo, conocido en el mundo del crimen y de los "traquetos" como "Don Berna", lo más conveniente para el país entero sería que el presidente renuncie a su fuero presidencial y abandone temporalmente sus funciones mientras se esclarece su papel y responsabilidad en este desmadre.

Igualmente debe procederse a la disolución inmediata del DAS y demás dependencias estatales implicadas y declarar en interinato a todos sus funcionarios. De proceder así, se abriría un compás de espera para que el presidente Uribe trate de curarse con el tiempo de esa enfermedad que agobia todo su cuerpo, llamada paramilitarismo en grado superior.

Desde la propia lógica constitucional del sistema, la Procuraduría General de la Nación, el Congreso Nacional y la Fiscalía General, se debe abrir un proceso penal contra el presidente de la República, contra Jorge Noguera y demás funcionarios públicos comprometidos con este escándalo, para determinar si es o no delito reunirse a hurtadillas de los controles constitucionales con maleantes y rufianes como los ya señalados.

La sociedad y la nación entera debemos estar en permanente vigilancia y la guardia en alto para que este vergonzoso asunto no se convierta en otro caso de flagrante impunidad y en un distractor intencional desde el poder ejecutivo, para desviar la atención sobre los casos de la compra de votos, el comprobado apoyo electoral y financiero de "Doña" Emilse López conocida como "la Gata", o el fracaso del llamado "proceso de paz" y los cientos de casos de corrupción oficial y para oficial señalados en los últimos meses.

Coyuntura Nacional

EL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS DECLARA CULPABLES AL ESTADO COLOMBIANO Y A LAS TRANSNACIONALES

Este 2 de abril del presente año, el Tribunal Permanente de Los Pueblos, Capítulo Colombia, asumió el compromiso de revisar y juzgar a las transnacionales que han violentado los derechos humanos y se han beneficiado de crímenes de lesa humanidad.

En esta ocasión se adelantaron investigaciones a las transnacionales Coca Cola, Nestlé y Chiquita Brands Banadex.

Se miró detenidamente la naturaleza de dichas empresas, sus trayectorias internacionales, magnitud económica, solvencia financiera, sus patrones de gastos en el contexto de la economía nacional discriminada en los campos de capital y trabajo.

El Tribunal constató que las grandes ganancias de estas empresas han sido producto de violaciones a la estabilidad laboral de los trabajadores, valiéndose además de participaciones en crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, resolvió acusarlas y hallarlas responsables.

En el 2005, Coca-Cola tuvo una solvencia económica de 628 millones de dólares, sin que hubiera inversión extranjera de su casa matriz.

Nestlé, entre 1990 y el 2005, pasó de producir 109 mil dólares por trabajador, a 427 mil dólares.

Y claro, los planes de inversión y utilidades han estado aventajados por las reformas laborales de los gobiernos tradicionales, expresados en cierres de fábricas y plantas subsidiadas, fraccionamiento de razones sociales, empleo temporales y terciados. Así la suerte de miles de trabajadores del sector alimenticio fue quedando a la deriva.

A partir de 1990, Coca Cola redujo 3.5% veces el número de trabajadores con estabilidad laboral y tres veces el número de sindicalizados, mientras que en la Nestlé, solo el 3% de los trabajadores alcanzó hoy los diez años de estabilidad en la empresa.

Estado y transnacionales comiendo del mismo plato, aunque con bocados diferentes en tamaño. Colombia se convirtió en una nación, en donde los representantes de los intereses del capital comercial, de la noche a la mañana, pasaron a ser ministros, como el caso de Sabas Pretel (2.003).

O como Luz Stella Arango y Ludmyla Flores, que de abogada y Jefe de Relaciones Laborales en la Nestlé, se convirtieron en Viceministra y jefa de Asuntos Laborales respectivamente, en el ministerio de Protección Social.

De cómplices comerciales, los pasan luego a que legalicen a través de la norma el robo a nuestra soberanía, el desconocimiento total de los derechos de los trabajadores, la desnutrición y el hambre.

De la misma manera, el Tribunal obtuvo testimonios y pruebas contundentes de cómo estas transnacionales están involucradas en el apoyo directo e indirecto a la guerra sucia que el Estado ha venido desarrollando contra líderes y trabajadores sindicalizados. En estos momentos, SINTRAINAL (Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Alimenticia) se encuentra al borde de la extinción.

A Coca-Cola y a la Nestlé hasta el momento se les ha hallado culpables de 9 y 10 asesinatos respectivamente.

En el caso de la Chiquita Brands, se evidenció su relación con el paramilitarismo. Se comprobó que en el 2001, no solo aportó financieramente, sino que transportó 3.000 fusiles AK 47 y cinco millones de proyectiles con destino a Urabá y al departamento de Córdoba, regiones altamente agredidas por los escuadrones de la muerte con total impunidad.

El Tribunal también resolvió acusar al gobierno colombiano por el incumplimiento al derecho al trabajo reconocido en la Constitución Nacional, así como de los derechos laborales contemplados en los Convenios Internacionales de la OIT.

El gobierno fue acusado además por promover la guerra sucia y la impunidad en los delitos de Lesa Humanidad, acciones violentas que también vienen afectando a comunidades indígenas y afro colombianas.

Por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de persecución del terrorismo.

De igual manera, se responsabiliza a Estados Unidos y a Suiza, como Estados cuya nacionalidad tienen las empresas transnacionales analizadas, por permitirles violar los derechos humanos, participando directamente en los delitos de Lesa Humanidad.

Podemos afirmar que a Colombia aún en los albores del siglo XXI, se le sigue considerando como un enclave al estilo de la década de los años 20, cuando nuestros territorios ya eran manoseados por la United Fruit y la Tropical Oil Company.

Hace muchos años que se viene repitiendo la historia de los saqueos, la corrupción, los atentados a la vida, la impunidad y la imposición de reformas laborales en detrimento del derecho al trabajo y al nivel de vida de los trabajadores.

A pesar de que poseemos un territorio rico en recursos naturales, capaz de satisfacer las necesidades básicas de la vida, tenemos que decir que en Colombia no se vive dignamente y que esta realidad está ligada a la manera como actúan y se hacen millonarias las transnacionales.

El robo de todos nuestros recursos, la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad, la privatización generalizada de todo servicio de carácter público y los altos niveles de indigencia, pobreza y hambre, han venido agudizando las violaciones de los derechos humanos en Colombia.

Hemos tenido que sortear innumerables batallas contra una clase política que por su obsesión enfermiza de concentrar y acumular riquezas, se arrodilla al capital foráneo y adopta frente al país posiciones excluyentes e intolerantes, valiéndose del terrorismo de Estado, de las más crueles violaciones a los derechos humanos en el continente.

El estudio, los testimonios recogidos, las investigaciones y los trabajos arduos desarrollados en los dos últimos años en Colombia por parte del Tribunal Permanente de los Pueblos, evidencian una vez más la gravedad de la situación y nos instan a tomar medidas más contundentes que neutralicen los planes y acciones demenciales por parte del Estado colombiano y las transnacionales.

Apoyar y asumir las decisiones de este Tribunal son tareas prioritarias para el presente año. La batalla contra la impunidad, las realizaciones de protestas en los países a que pertenecen las transnacionales, la obtención de nuevas pruebas y documentos que permitan formular acusaciones ante las respectivas instancias internacionales y nacionales, harán parte de estas tareas.

Los medios de comunicación deben que jugar un papel muy importante al respecto. El silencio los convierte en cómplices de lo que viene sucediendo hace muchos años en nuestro país.

Es tarea de todos los colombianos parar de una vez por todas la triste subasta de la vida a que hemos sido sometidos.

Recuperar el derecho a la dignidad de los trabajadores presupone fundamentalmente la lucha contra el imperialismo y el gobierno colombiano, contra el terrorismo de Estado y la entrega de nuestra soberanía.

La solución política al conflicto social y armado es una gestión colectiva a adelantar, para que las violaciones a los derechos humanos y los delitos de Lesa Humanidad sean entre otras, una más de las victorias ganadas, gracias a la unidad, la organización y la movilización del pueblo colombiano.

Coyuntura Nacional

ESTADOS UNIDOS IMPONE EL IMPUESTO PARA LA GUERRA

El gobierno saliente del candidato presidente Uribe quiere dejar listos sus últimos desastres, en medio de la profunda crisis de legitimidad en que la institucionalidad colombiana se encuentra, producto de la corrupción y de su carácter criminal y mafioso.

Como presidente continúa con su política de guerra y “seguridad democrática”, llamando a los generales a la victoria final, es decir, al todo vale mi general y consiguiendo los recursos para esos planes que va a dejar montados para la nueva administración. Ya su embajador en EE.UU. Andrés Pastrana, cogestor del Plan Contra Colombia, ha logrado que se les aprueben recursos suficientes para continuar hundiendo al país en la confrontación y la represión.

El imperio yanqui continúa con la inversión pero exige que sus socios también pongan. Es decir, todos los que ganan que inviertan. Ése es su concepto de justicia.

Para eso aparece de nuevo el impuesto de guerra. Lo propuso el presidente Álvaro Uribe Vélez en la Asociación de Fiduciarias de Colombia a fines de marzo. Hubo escándalo, poquito, y él impuso la idea de que los dineros hasta ahora gastados por el Estado sí han favorecido la “seguridad democrática”. Más exactamente la seguridad democrática del capital, diríamos. La de los ricos. La seguridad de su democracia.

A voz en cuello los principales periódicos editorializaron y los grandes cacahos (ricos) se pronunciaron para cumplir. El ahora archimillonario Sarmiento Angulo salió presto a apoyar la iniciativa con claro sentido “patriótico”.

Es otro impuesto para el apuntalamiento de la situación económica y social más injusta de la historia republicana de Colombia. Todos los índices que marcan los aspectos cualitativos del cumplimiento de los deberes de Estado con los derechos económicos, sociales y culturales son alarmantes.

Las cifras de desempleados y empobrecidos, de tanto repetirlas ya no dicen nada, pues ni la mente más febril alcanza a comprender la tragedia humana de

los 30 millones de compatriotas que están viviendo por debajo del nivel de ingresos necesarios para subsistir dignamente.

Seria éste el segundo impuesto de guerra de Álvaro Uribe, que a punta de discursos y de estadísticas manipuladas, quiere hacer creer a los colombianos que ya no hay un guerrillero más para dar de baja y que los paracos, aunque se duplicaron, se volvieron ángeles como por encanto, por cuenta de los resultados de una buena inversión y un buen gasto en "seguridad democrática".

Los logros de la aplicación de la seguridad democrática son evidentes:

Las poblaciones carcelarias han aumentado sobre todo con dirigentes sociales y comunitarios, producto de las capturas masivas e indiscriminadas. Han aumentado los asesinatos de dirigentes políticos de izquierda en todo el territorio nacional, la insurgencia está entera, con todas sus estructuras estratégicas y mandos sin novedad. El paramilitarismo se afirmó en su condición de gobernante, con DAS y todo, recibiendo prebendas y poniendo congresistas y dignatarios, aceitando todo con su dinero non santo. Colombia mantiene sus primeros y segundos puestos en producción y tráfico de cocaína, asesinatos con arma de fuego, corrupción administrativa, criminalidad e impunidad, falsificación de dólares y una larga lista de otras conquistas nada honrosas.

La seguridad democrática es un globo, envuelto en el donaire que da la televisión y la eterna presencia del presidente de la República, quien vive envuelto en teflón como si nada de lo humano le correspondiera.

Para qué impuestos para una guerra, si en Colombia "el conflicto no existe", lo niega el presidente y él, impertérrito pese a la evidencia material, a las decenas de miles de víctimas, a los estudios realizados por universidades y centros de investigación, se obstina en desconocerlo como si tuviera una venda en sus ojos y un tapón en los oídos.

Es que estamos hablando de ingentes recursos. Con el primer impuesto se recogieron 2,5 billones de pesos en cuatro cuotas entre el 2002 y el 2003. (Un billón de pesos es más o menos de 455 millones de dólares) Fue un impuesto por una sola vez. Dinero que fue directamente a engrosar el presupuesto del ministerio de la guerra.

Uribe lo planteó en una entrevista con el periódico El Colombiano: "...meterse la mano al dril para pagar recompensas, informantes, detenciones masivas, etc.", con un "mecanismo concertado con los más pudientes". Es claro. Para el anterior impuesto el sector financiero, pagó el 25% del total del recaudo.

El impuesto de guerra es más sufrimiento y más pobreza para el conjunto de los colombianos, por su doble condición que impulsa la represión, dinamiza la guerra y se invierte en un sector totalmente improductivo.

Este impuesto, que de todas maneras lo pagamos todos los colombianos en los costos de los productos y los servicios a los consumidores, es uno más de la tendencia regresiva y reaccionaria que en materia tributaria traen los gobiernos

de las últimas décadas en Colombia. Los especialistas del sector así lo han demostrado, como también la profundización de la inequidad.

El gobierno saliente del candidato presidente aumenta el IVA (Impuesto al Valor Agregado) que afecta a la totalidad de la población, reduce el impuesto de renta a los grandes capitales, reduce los aranceles y amplía las exenciones para los grandes inversionistas. Con el IVA solamente se recogieron 13 billones de pesos el año pasado.

El IVA ya casi cubre todo el universo de lo gravable, es decir incluye los artículos de primera necesidad. Al comprar, cualquier obrero o empleado paga igual que el dueño de la fábrica, rico industrial, hacendado o terrateniente. Las pensiones se gravan, la retención en la fuente de los asalariados es una constante. Y para los ricos están las contrarreformas tributarias que generan las exenciones de impuestos y los descuentos en sus transacciones empresariales.

Uribe mantiene en este momento privilegios tributarios a empresas eléctricas, constructoras, del turismo, forestales, farmacéuticas y de software. Se eximen de impuesto de renta las inversiones en palma africana, cítricos, frutales, cacao y forestales. Los narcos no pagan impuestos. Sin olvidarnos de los descuentos producto de las "altruistas donaciones" a través de sus fundaciones o a fundaciones. Por ejemplo, por donación a la Fundación General Matamoros, que atiende a los militares y sus familias, recibe una deducción de los impuestos del 110% de aporte.

El gobierno saliente quiere recoger este año cerca de 50 billones de pesos en impuestos. Con la tasa más alta en ganancia para el sector financiero, la máxima rentabilidad para el capital extranjero y la privatización del patrimonio de los colombianos. Será apropiándose del sudor y del trabajo de los colombianos humildes como logrará su objetivo.

El gobierno de Uribe proclama a los cuatro vientos su decisión de buscar una paz para Colombia. Estos hechos demuestran lo contrario. Indican que continúa con su propósito guerrillista, que en su agenda no hay espacio para la paz. Rearmar a un ejército genocida como el colombiano, infestado de torturadores y violadores de los derechos humanos, no es un paso hacia el único destino sensato para nuestra patria, es por el contrario, muestra fehaciente de la voluntad de intensificar el conflicto interno.

El ELN está haciendo esfuerzos sustanciales en la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado, pero entiende que los colombianos no podemos hacernos muchas ilusiones con un gobierno que busca por todos los medios arrear la represión y la guerra y permanece ajeno al devenir necesario para nuestro país.

Entrevista

EL COMANDANTE FRANCISCO GALÁN HABLA DE LA CASA DE PAZ

Presentamos a nuestros lectores la segunda y última parte de la conversación que sostuvo SINPAL (Sistema Informativo Patria Libre) con el Comandante Francisco Galán sobre su experiencia en la Casa de Paz.

Cómo entiende la gente la paz

Hay la paz lúdica, la paz como el arte, la paz como sueño abstracto y la paz con justicia social. Yo tengo la impresión que las dos concepciones terminaron volviéndose huecas, sin sentido, tanto la paz lúdica como la paz con justicia se han convertido en discurso, en panfleto. Y hay que recuperar el concepto de paz y hay que recuperar el concepto de justicia social. Por eso el concepto que plantea el ELN llega.

La paz no se puede hacer en el aire, no puede ser un concepto que quede en el aire, no se puede crear un escenario abstracto, no puede ser un discurso, o la capitulación, que es en lo que tiene experiencia este país, los procesos de paz como una capitulación.

Nos han enviado montones de propuestas a la Casa de Paz sobre la paz. Recuerdo esa que le conté a TELESUR, de "La paz se viste de Café". Estaba allá en el hotel de Quirama, cuando llegó un maestro que traía en hojas papel oficio, escrita a mano su propuesta. Yo me senté allí en una salita y le dije a ver su propuesta. Me dijo es "La paz se viste de café", le dije que la paz se viste es de blanco. Me respondió que lo que pasaba era que él era profesor en siete u ocho veredas (caseríos) y allá había combates y no habían podido coger el café y necesitaban una tregua para recogerlo.

Queda uno impresionado: yo quiero la paz para coger el café. Y eso si es la paz. Mire como la ve la gente. La paz para que no hayan muertos, paz para que haya trabajo, para coger la cosecha. Tengo una gran cantidad de anécdotas de todo este trabajo.

Han llegado montones de propuestas que uno no se las alcanza a leer en medio de todas estas ocupaciones.

Entonces, cuando a los quince o veinte días no hay respuesta sobre la propuesta, llega la protesta. Al lado de cada propuesta hay una protesta porque no hay solución pues la gente se está dirigiendo a nosotros como gobierno alterno, ya que el otro gobierno no le ha resuelto sus problemas pues nos los plantean, problemas desde todas las actividades económicas y humanas de la sociedad.

Nosotros dijimos ¿cómo hacemos?, aquí o respondemos estas propuestas o nos vamos a echar la gente encima. Entonces intentamos convocar la gente que envía propuestas, pero a algunos les queda muy difícil, pues llegan propuestas desde Samaniego, en Nariño, o propuestas de los pescadores de Tumaco, ¿cómo vamos a traer a los pescadores de Tumaco?, no pueden venir.

Hemos intentado resolverlo desde un concepto nuevo que es para darle materialidad al concepto de paz y es el concepto de gobernabilidad. O sea, no somos nosotros los que podemos resolver, es el pueblo empoderándose en el ejercicio del gobierno. No hay otra manera, no es creándole ilusiones a la gente que nosotros vamos a poder resolver los problemas de este país.

Entonces la propuesta que traemos es paz y gobernabilidad, paz y democracia, paz y justicia social. Por eso la propuesta del ELN iniciada en este momento electoral no muere aquí, trasciende a las jornadas electorales del 2007, trasciende las jornadas electorales del 2010. Hay que construir escenarios de paz y de gobernabilidad. Ese es el meollo de la propuesta.

Los sectores políticos y la Casa de Paz

El espectro de sociedad es muy amplio, muy amplio. Han llegado de todos los sectores sociales y políticos, de todo el país y del exterior también. Hay gente de cerca de quince países que han ofrecido estar, quieren ser tenidos en cuenta en el proceso.

Hay muchos que hacen de la paz un instrumento para su acción política, para su protagonismo, para su reencauche. Si somos capaces de construir un proceso de paz hay que definir paz para quién y gobernabilidad para quién y para qué.

Yo creo que hay que hablar con todos los sectores. Un empresario hizo una propuesta que es importante mirarla. Dijo, luego de que oyó mi explicación sobre los cinco obstáculos, que compartía con nosotros que este conflicto obedece a no haber resuelto las causas que lo originaron, pero esto hay que hacerlo más concreto. Está de acuerdo en que a un proceso hay que construirle una agenda social, concreta, pues esa agenda no es una bolsa rota. Planteó que por ejemplo por qué con toda esa gente que viene acá no se inicia un estudio sobre las metas del milenio, las de la ONU, la parte social, pues ve retratado este país con todos sus conflictos, que son los conflictos que tiene la humanidad pero agravados por la violencia. Esas metas lo único que no tienen es cómo devolverle las tierras a los campesinos que se las han robado los paracos. Considera que colocándole unos ingredientes particulares se puede hacer una buena agenda como punto de partida. Me extrañó que lo dijera él.

Llegaron los desplazados con consignas generales y yo les decía no, si nosotros queremos iniciar la discusión de una agenda humanitaria, ¿qué le vamos a plantear al gobierno en concreto relacionado los desplazados? Le vamos a plantear en la mesa, que la dignidad, que la soberanía... dígame en terrenos cuánto, en casas cuántas, dígame en inversión cuánto, dígame cuántas familias van a retornar y cuántas se quedan, dígame una propuesta concreta. Porque es que nosotros, en tantos años de lucha y de protestas y nunca pensamos en cómo construir la solución.

No hay una propuesta de reforma agraria y el día que nos tengamos que sentarnos a hablar sobre tenencia de la tierra, sobre la política de tierra no tenemos. La gente está esperando que la insurgencia la haga pero la insurgencia ha estado ocupada en la resistencia y no ha tenido suficiente tiempo para formular la propuesta. Estamos sin propuesta. Pero eso les dije, se me van a hacer la propuesta que la necesito. Ahora, hay gente que hace montañas de papel sobre los desplazados y con eso sacan platica, hablando de los desplazados, pero sin dejarlos hablar a ellos.

Hay algunos sectores que trajeron propuestas más concretas, ya con cifras, con metodología, con cosas específicas.

Hay que llevar a la gente a pensar en sus problemas y a formular propuestas. Esos son los niveles de participación...

La Convención Nacional será donde el pueblo defina su destino. Y por eso será construida no dentro de la estrategia del ELN, sino dentro de la estrategia de paz para el país, en la estrategia del pueblo que dice que tenemos que construir una nación diferente.

Perspectivas de la Casa de Paz, otros desarrollos.

La Casa de Paz tiene unos retos muy grandes, primero cómo caminar al lado del ELN sin ser del ELN. Cuesta hacer esas divisiones. Estas imágenes reflejan un poco una discusión que es hermosa porque no se sabe bien dónde termina la sociedad y dónde comienza el ELN, al contrario, hacia el gobierno si es clara la separación.

Por eso ahí hay pluralidad y la pluralidad es muy difícil mientras exista el conflicto y ese es uno de los grandes retos. Si ese reto no se supera se puede macartizar demasiado la Casa de Paz, se pone en peligro esa población de dirigentes que llega allí y que hacen parte de esta estrategia de paz.

Otro reto ha sido hacerla útil. La casa de paz es una cosa desordenada y sigue desordenada todavía pues porque nadie sabía qué es Casa de Paz y todos nos la estamos inventando en el camino y no hemos sido capaces de construir los elementos que la hagan estable pero además no es estable porque el móvil es una propuesta que va y se asienta por allá, en cualquier parte de Colombia. Cada cual tiene un concepto de la Casa de Paz y ese concepto hay que mirarlo, ver cómo se hace y yo creo que lo importante es cómo se hace escenario, se hace punto de encuentro, punto de consenso. Lo que sí queda claro es que la casa de paz tiene que ser diversa y plural, no uniforme. Habrá tantas casas de paz como el que las quiera construir.

Los de la Comisión de Facilitación dijeron que ellos iba a construir su propia casa de paz y les dije: muy bien, solo que ustedes la harán a su imagen y semejanza. Los de la CUT dijeron que también van a hacer su casa de paz y la harán a su imagen y semejanza, y cada cual irá haciendo su casa así. Pero eso sí, denle elementos comunes que unan a todas las Casas de Paz pues lo importante es trabajar por la solución política al conflicto social y armado, ese es el sustrato, la esencia. Trabajar sobre unos ejes centrales que son la paz con justicia social, la paz y la gobernabilidad. El artículo 22 de la Constitución nacional que dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Pero esta lucha hay que adelantarla con la participación de la gente y de las regiones y sobre esos ejes centrales construir la diversidad de propuestas que surjan.

Estamos en la tarea de ampliar el grupo de garantes y tener una casa principal y otras casas. En la casa principal se piensan hacer algunos departamentos por temas y por sectores, por ejemplo un departamento de análisis situacional o de coyuntura, donde pensamos convocar algunos analistas mensualmente. Otro departamento de análisis del narcotráfico y presentación de propuestas, se piensa hacer una cumbre internacional sobre paz y narcotráfico y se va a

empezar por unos talleres. Otro departamento que sea el de los jóvenes y estudiantes, un escenario donde ellos trabajen su propuesta o se encuentren.

Se mantiene la Casa de Paz...

Eso es inherente al proceso, el gobierno sabe que sin eso no puede seguir. En el momento que cese pues se viene abajo todo el proceso. Ahora hay que fortalecerla.

Aniversario

EL ASESINATO DE JORGE ELIECER GAITÁN, OTRO CRIMEN POR JUZGAR

Lo asesinaron porque decía la verdad a voz limpia en cualquier plaza pública, en un país donde se ha impuesto históricamente el dominio de una pequeña élite. Lo asesinaron porque vieron en él una amenaza real para mantener el poder. Lo asesinaron porque lo seguía con fervor esa fuerza incontenible de los desheredados, de los que reclamaban vivir con dignidad.

Jorge Eliécer Gaitán, fue muerto aquel 9 de abril de 1948 y este crimen es un hecho más que confirma la esencia de la oligarquía colombiana: la intolerancia total a cualquier opositor. La realidad ha evidenciado con creces que los sucesores de esa minoría que domina desde la naciente república hasta hoy, defenderán sus privilegios a sangre y fuego.

Gaitán conoció a fondo tanto la naturaleza de los partidos políticos que se han turnado el gobierno, como su relación con los gobernantes de Estados Unidos.

Estaba claro de los trucos discursivos y de las acciones criminales de los políticos para mantener una ficticia división en el partido único de la oligarquía y lo denunció. Fanáticos de la divisa "divide y vencerás" no se han detenido ante nada para impedir que la educación y el bienestar lleguen a las grandes mayorías y así puedan comprender y defender sus intereses unidos.

Investigó sobre numerosos asesinatos y masacres y denunció con nombres a sus autores tanto materiales como intelectuales. Es bien conocida, por ejemplo, la acusación que sustentó ante el Congreso de la República por el horrible crimen de lesa humanidad cometido contra miles de trabajadores de la United Fruit en la plaza de la población de Ciénaga, al norte de Colombia.

Conoció a fondo las intensiones de los gringos en nuestro país, cómo se iban posesionando de nuestras riquezas y entronizando en la totalidad de la vida nacional con la venia de la sumisa clase en el poder.

Si bien la furia popular terminó con la vida del asesino a sueldo que cegó su existencia, nadie quedó convencido de que aquel cometió el crimen por iniciativa propia. A medida que han pasado los años la certeza de que esa mano asesina fue pagada y guiada por la complicidad entre la oligarquía y el imperio se ha profundizado.

En diversas investigaciones hechas para poner en claro quién ordenó el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán ha aparecido la intervención de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA). Y no es para dudarlo. Los documentos sobre este caso no han sido desclasificados a pesar del tiempo, por algo será.

Gaitán no podía ser presidente de Colombia porque sus ideas y su acción estaban despertando aquel torrente de pueblo al que tanto temen los ricos y los imperialistas. Quedó demostrado con la insurrección del 9 de abril que solo pudo ser contenida mediante una cruel e implacable represión, porque no surgió un liderazgo capaz de orientarla.

Otra hubiera nuestra historia si Gaitán hubiera llegado al gobierno, como otra sería si aquella insurrección popular hubiera tenido una dirección que interpretara el sentir del pueblo.

Hoy, ante la pobreza extensa y profunda, ante la entrega de nuestra patria al águila imperial, ante la represión demencial que padecemos y ante la amenaza evidente desaparecer como nación, nuestro pueblo lucha de diversas maneras.

Es necesario recordar este magnicidio y evocar colombianos de la talla de Gaitán, para mayor inspiración en la batalla por la justicia y la dignidad, para construir la propuesta de una Colombia para todos, soñada por este mártir y tantos otros que cayeron antes y después de él.

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán es otro hecho que se suma al enorme expediente de los oligarcas colombianos y de la élite norteamericana y que un día, no lejano, será esclarecido y juzgados los responsables.

